



*Legislatura de la Provincia  
de Río Negro*

FUNDAMENTOS

Es fundamental asumir que el problema de la seguridad nos constituye un tema policial. La seguridad de los habitantes, en definitiva de la comunidad; es una cuestión que excede el marco de la prevención y represión del delito, constituyendo este último aspecto sólo un capítulo de la seguridad pública.

El desarrollo de la seguridad privada en nuestro país indica a través de cifras extraoficiales de la seguridad privada en nuestro país indica a través de cifras extraoficiales que rondaría en los 100.00 agentes privados. Una parte sustancial de esos agentes desarrolla su actividad en la Capital Federal, pero es notoria la intensificación de este tipo de actividad en las ciudades más importantes de provincia.

Este crecimiento pone de relieve en forma paralela numerosos problemas, tales como el intrusismo, la falta de normas de homologación de productos, deficiente formación de los vigilantes, irregularidades en su funcionamiento y comisión de numerosas infracciones, así como la ausencia verificada de requisitos esenciales.

En este como en tantos otros temas, se trata de recuperar la esencia de lo público que, en la situación actual con un estado débil y una sociedad fragmentada, sólo será posible si alcanzamos la calidad institucional y si somos eficaces en los instrumentos y rigurosos en los controles de gestión.

Es necesario definir que la contratación de una persona o de una empresa de seguridad establece una relación de tipo comercial en un ámbito estrictamente civil. Por las características particulares de la actividad, el Estado debe ejercer un fuerte control en el marco de una ley regulatoria especial.

El tema de la seguridad pública es indelegable por parte del Estado. La seguridad privada ni la sustituye ni es supletoria de la seguridad pública.

Para tal fin es necesario ser muy estricto en el registro de datos, tanto sea de personas como de empresas, de armamentos y equipos. Es imprescindible tener identificados vehículos, equipos de comunicación, inmuebles, cantidad y tipo de armas.

Se deben estipular en forma rigurosa los requisitos para la habilitación de la actividad, tanto para las empresas y su personal como para las personas que la ejerzan en forma individual.

Es necesario supervisar la capacitación y la actitud



*Legislatura de la Provincia  
de Río Negro*

psico-física de todas las personas vinculadas a la actividad. Se debe respetar la incompatibilidad absoluta entre la pertenencia a las fuerzas policiales, militar o de seguridad y la actividad de seguridad privada.

Debe existir un control ciudadano directo sobre las personas y empresas a través del Banco de Datos de acceso público, a la vez que se debe proceder a la inhabilitación o a quienes hayan sido exonerados de la administración pública nacional, provincial o municipal y, especialmente, si lo fueron en su carácter de integrantes de alguna fuerza policial, militar o de seguridad.

Es necesario comprender que estas normas serían un paso fundamental en la articulación del sistema de seguridad para nuestros habitantes, dándole cabida en dicho sistema a quienes hacen de esta actividad una profesión en el campo privado con seriedad e idoneidad y, paralelamente habremos contribuido a reforzar el conjunto de derechos y garantías de la ciudadanía.

Agradezco la colaboración y asistencia técnica en la redacción del presente proyecto al señor Rubén Suárez y a los doctores Rodolfo Filippini y Marcelo J.E. Chironi.

Por todo ello:

AUTOR: Eduardo Mario Chironi



*Legislatura de la Provincia  
de Río Negro*

**LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO  
SANCIONA CON FUERZA DE  
L E Y**

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- Regúlese por la presente ley la prestación del servicio de vigilancia, custodia y seguridad de personas o bienes, como así también las actividades anexas y complementarias que con motivo de éstas se desarrollen, por parte de personas físicas o jurídicas privadas. Las actividades que las mismas desarrollen estarán exclusivamente orientadas a la prevención de la comisión de delitos y tienen el carácter de actividades complementarias, subordinadas a la normativa y políticas que regulen la seguridad pública por parte de la Provincia de Río Negro.

Artículo 2°.- Se consideran actividades reguladas por la presente ley, las que a continuación se detallan:

- a) VIGILANCIA PRIVADA: Es la prestación de servicios que tienen como objetivo la seguridad de bienes y de personas, por parte de personal sin facultades para portar armas. Queda comprendido en el presente, el servicio de vigilancia a distancia, mediante alarmas interconectadas con centros de control y alerta.
- b) CUSTODIAS PERSONALES: Consiste en el servicio de acompañamiento y protección de personas determinadas, por parte de personal facultado para el uso de armas, con el objeto de disuadir que sean pasivas de actos ilícitos.
- c) CUSTODIA Y TRANSPORTE DE BIENES Y VALORES: Son los servicios de depósito, custodia, recuento y clasificación de billetes, títulos, valores y demás objetos que por su peligrosidad, valor económico o expectativas que generen puedan requerir protección especial sin perjuicio de las actividades propias de las entidades financieras. Asimismo, el transporte y distribución de dichos objetos a través de los distintos medios, realizándolos en su caso, mediante vehículos autorizados por la autoridad de aplicación.

Se excluyen de las actividades permitidas en el presente inciso, los servicios que por legislación de



*Legislatura de la Provincia  
de Río Negro*

seguridad bancaria establecen la prestación de los mismos por parte del personal policial en actividad de la provincia.

- d) ACTIVIDADES ANEXAS, las que comprenden la organización, provisión, comercialización, instalación y mantenimiento de equipos electrónicos, ópticos y electro-ópticos, dispositivos y sistemas de seguridad electrónica para la protección de bienes, personas y contra el fuego u otros siniestros, sistemas de observación y registro, imagen y audio así como la recepción, transmisión, verificación y registro de las señales y alarmas.

Artículo 3°.- Será autoridad de aplicación de la presente ley la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia, dependiente del Ministerio de Gobierno.

Artículo 4°.- El gobierno de la provincia de Río Negro, en uso del poder de policía para procurar la protección de personas y bienes con arreglo a lo dispuesto por la Constitución Nacional, por la Constitución Provincial y las leyes vigentes en la materia, ejercerá en forma indelegable las facultades de autorización, inspección y, compulsas de libros y sanción de las empresas de seguridad que tengan su domicilio social y el desarrollo de sus actividades en su jurisdicción.

Artículo 5°.- Las actividades y servicios de seguridad privada se prestarán con absoluto respeto a la Constitución Nacional y Constitución Provincial con sujeción a la presente Ley y al resto del ordenamiento jurídico. El personal de seguridad privada se atenderá en sus adecuaciones a los principios de integridad y dignidad; protección y trato correcto a las personas, evitando abusos, arbitrariedades y violencias y actuando en congruencia y proporcionalidad en la utilización de sus facultades y medios disponibles.

Artículo 6°.- Las empresas y el personal de seguridad privada tendrán obligación especial de auxiliar a las fuerzas policiales, prestarles su colaboración y seguir sus instrucciones en relación con las personas, los bienes, los establecimientos o vehículos de cuya protección, vigilancia o custodia estuvieran encargados en el marco de las funciones que específicamente les atribuye la ley, cuando el Gobierno de Río Negro así lo disponga.

Artículo 7°.- La autoridad de aplicación autorizará el ejercicio de la actividad, previa acreditación de la inscripción en el Registro Provincial de Armas del armamento que se afectará a la actividad, el que deberá ajustarse a lo dispuesto por la presente, y demás leyes regulatorias en la materia. Asimismo incorporará los datos de las personas físicas y jurídicas autorizadas en un Banco de Datos de dependencia exclusiva de la autoridad de aplicación.



## *Legislatura de la Provincia de Río Negro*

Artículo 8°.- También deberán asentarse en el Banco de Datos los de las personas físicas y jurídicas que, por el carácter interjurisdiccional de su actividad, posean habilitación expedida por la Subsecretaría de Interior y realicen actividades en jurisdicción de la Provincia de Río Negro aunque no posean en la misma su domicilio social.

Artículo 9°.- El Banco de Datos de los Servicios de Seguridad Privada de la Provincia será de acceso público, de actualización permanente y obligatoria. La autoridad de aplicación remitirá copia certificada del mismo a la Defensoría del Pueblo de la Provincia, como depositario extrapoder de información restringida. La reglamentación de la presente ley determinará los alcances, formalidades y condiciones para el acceso a la información por parte de aquellos ciudadanos que así lo requieran.

Artículo 10.- Las empresas deberán llevar Libros-Registros, foliados y rubricados por la autoridad de aplicación. En ellos se registrarán las altas y bajas del personal de la empresa debiendo comunicarse las modificaciones dentro de las setenta y dos (72) horas de producidas. Tales circunstancias serán asentadas por la autoridad de aplicación en el Banco de Datos. También deberán asentarse en los Libros-Registros las armas de fuego afectadas y el parque de municiones existente; el nombre del personal autorizado para su uso así como ocasiones y objetivos en que dicho personal haga uso de las mismas.

Artículo 11.- La autoridad de aplicación podrá requerir la información contenida en los Libros-Registros y determinará la forma en que tales libros deben ser llevados. En ningún caso el plazo de conservación de los Libros-Registros será inferior a los diez (10) años.

Artículo 12.- Las personas físicas o jurídicas privadas autorizadas al ejercicio de las actividades reguladas por la presente ley presentarán un informe sobre sus actividades a la autoridad de aplicación con la periodicidad que la reglamentación determine. En dichos informes deberán constar los servicios de seguridad contratado con terceros, individualización del contratante y naturaleza del servicio contratado, subcontrataciones, así como todo otro aspecto relacionado con la seguridad pública que la autoridad de aplicación determine.

Artículo 13.- La autoridad de aplicación deberá informar a la Comisión de Seguridad Interpoderes de Río Negro, con una periodicidad no superior a los seis (6) meses, sobre el funcionamiento del sector, adjuntando informe particularizado sobre aquellas personas físicas o jurídicas que hubieran infligido la presente ley.

Artículo 14.- Las empresas y el personal de seguridad, en relación de dependencia, contratado, subcontratado o independiente, no podrán ejercer ningún tipo



*Legislatura de la Provincia  
de Río Negro*

de investigación que tenga por objeto establecer el origen racial o étnico, el estado de salud o sexualidad de persona alguna, opiniones políticas, sindicales o religiosas o controlar la expresión de tales opiniones, ni crear o mantener banco de datos sobre tales cuestiones.

Artículo 15.- Las empresas y el personal de seguridad tienen expresamente prohibido comunicar a terceros, a excepción de los prescripto en el artículo 8 de la presente o por requerimiento judicial cualquier información que conozcan en el ejercicio de sus funciones sobre sus clientes, personas relacionadas con estos, así como de los bienes o efectos que custodien.

Artículo 16.- Los prestadores de servicios de seguridad privada se encuentran obligados a poner en conocimiento de la autoridad policial y/o judicial correspondiente todo hecho delictivo del que tomen conocimiento sus responsables y/o empleados en el ejercicio de sus funciones. El ocultamiento o retardo en efectuar las correspondientes denuncias en tiempo y forma será motivo de las sanciones previstas en esta ley sin perjuicio de las que correspondieren de acuerdo al Código Penal.

CAPITULO II

DE LA HABILITACION, REQUISITOS Y OBLIGACIONES DE LOS  
PRESTADORES

Artículo 17.- Las personas Jurídicas prestadores del servicio deberán responder a la organización societaria que la reglamentación determine, quedando expresamente prohibida la inclusión de sociedades anónimas.

Artículo 18.- Es condición para la habilitación de las personas físicas solicitantes así como de los administradores, gerentes, directores, asesores, mandatarios, socios y/o gestores si se tratara de personas jurídicas:

- a) ser ciudadanos argentinos mayores de edad.
- b) certificado de aptitud psico-física, otorgado por un establecimiento público de salud de la Provincia de Río Negro, expedido con una antigüedad no superior a los tres (3) meses de iniciación del trámite de habilitación.
- c) No encontrarse registrado en la Subsecretaría de Derechos Humanos o en los registros de la CONADEP por grave violación a los derechos humanos.
- d) Residir en el país, debiendo denunciar el domicilio real y toda variación del mismo dentro de los diez (10) días de producido, ante la autoridad de aplicación.



*Legislatura de la Provincia  
de Río Negro*

- e) No encontrarse procesado o condenado por delito doloso. En caso de registrar antecedentes judiciales deberá presentar testimonio con absolución o sobreseimiento definitivo.
- f) No revistar como personal en actividad en alguna fuerza armada, policial, de seguridad, organismos de información e inteligencia y/o de los servicios penitenciarios.
- g) No haber sido exonerado ni poseer antecedentes desfavorables compatibles con esta actividad en la administración pública nacional, provincial o municipal, ni en las fuerzas armadas, de seguridad, policiales, organismos de inteligencia y/o penitenciarios.
- h) No haber participado durante la vigencia de esta ley, de actividades, empresas o agencias de seguridad e investigaciones sin la correspondiente habilitación.
- i) La formación profesional que la reglamentación o la ley determinen.
- j) No haber sido denunciado ni tener antecedentes relacionados por causas de violencia familiar.

Artículo 19.- Serán requisitos complementarios para obtener el certificado de habilitación, los siguientes:

1. En el caso de las personas físicas:
  - a) La contratación de una póliza de seguro de responsabilidad civil hacia terceros en los términos establecidos en la reglamentación.
  - b) Certificado de cumplimiento de las obligaciones previsionales y fiscales.
2. En el caso de las personas jurídicas:
  - a) Póliza de seguros de responsabilidad civil;
  - b) Otorgamiento de una garantía fijada por la reglamentación de esta ley.
  - c) Capital mínimo proporcional a la cantidad de personal contratado por la empresa o al valor de los bienes propios denunciados por ésta.
  - d) Pago de la tasa de habilitación que será fijada por la reglamentación.
  - e) Certificado de domicilio de su sede social y



*Legislatura de la Provincia  
de Río Negro*

administrativa.

- f) Certificado de cumplimiento de las obligaciones previsionales y fiscales.
- g) Declaración jurada conteniendo nómina de accionistas de la empresa con especificación del porcentaje societario de cada uno. De cada modificación deberá informarse a la autoridad de aplicación en el plazo de treinta (30) días de producida.
- h) En ningún caso la garantía y la tasa de habilitación deberán exceder las exigencias razonables de cada plaza, dentro del espíritu de impedir el monopolio de la actividad o dejarla reducida a un número mínimo de empresas.

Artículo 20.- La garantía exigida en el artículo 18, inciso 2.b) consistirá en una suma de dinero en efectivo, seguro de caución, valores, títulos públicos nacionales o provinciales según el valor de cotización en Bolsa en el momento de constituirse, certificado por entidad bancaria, donde habrá de efectuarse dicho depósito. Su finalidad es garantizar el pago de eventuales multas y su monto será fijado por la autoridad de aplicación.

Artículo 21.- Para la restitución de las sumas de dinero, títulos o valores depositados en caución, los prestadores habrán de presentar:

- a) Declaración jurada en la que conste fecha de cesación de actividades, haber abonado la totalidad de remuneraciones e indemnizaciones, cuotas sindicales, obras sociales y cajas previsionales en que se encuentran comprendidas las actividades. La declaración jurada deberá estar certificada por contador público.
- b) Certificado de libre deuda, o constancia equivalente del sistema de seguridad social.

Artículo 22.- El cambio de titularidad de las sociedades habilitadas deberá contar con autorización previa de la autoridad de aplicación.

Artículo 23.- Los prestadores de servicios de seguridad privada deben contar con un director técnico, quién deberá velar por el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y su reglamentación. Deberá reunir los requisitos exigidos en los artículos 17 y 18 de la presente y acreditar idoneidad profesional para la función. A tal efecto se consideran idóneos:

- 1.- Los licenciados y/o especialistas en seguridad y/o afines según lo establezca la reglamentación, con



*Legislatura de la Provincia  
de Río Negro*

título habilitante extendido por autoridad competente y de conformidad con los programas oficiales aprobados por el Ministerio de Educación.

- 2.- Los que se hayan desempeñado en cargos directivos en empresas de seguridad e investigaciones privadas por un lapso de diez (10) años, o diez (10) de servicios prestados en las fuerzas armadas, de seguridad, policiales o del servicio penitenciario como personal superior, o por un lapso de diez (10) años como personal subalterno en dichas fuerzas, siempre que no posean antecedentes desfavorables durante su permanencia en la fuerza. A partir de dos años de vigencia de la presente Ley deberán rendir un examen habilitante para mantener la condición.

Artículo 24.- Los empleados destinados a tareas operativas de jefes de seguridad, supervisores, vigiladores y/o custodios de las personas físicas que desarrollen esta actividad en forma independiente deberán poseer asimismo certificado habilitante correspondiente a cada actividad, otorgado por los establecimientos que la autoridad de aplicación determine. La reglamentación establecerá la vigencia de cada uno de ellos, los plazos para la capacitación del personal que cumple servicio y para la revalidación de los certificados, previo curso de reentrenamiento.

Los empleados destinados a tareas operativas que impliquen la utilización de armamento deberán ser mayores de veintiún (21) años y acreditar la categoría de Legítimos Usuarios de Armas de "Uso Civil Condicional", que otorga el Registro Nacional de Armas.

Artículo 25.- Los prestadores serán responsables ante la autoridad de aplicación en cuanto a que el personal a incorporar no registre antecedentes desfavorables para el cumplimiento de sus actividades de seguridad.

Con el consentimiento de los aspirantes deberán solicitar todos los antecedentes policiales, judiciales o de organismos estatales donde se hubieran desempeñado. Las empresas que alteren, falsifiquen u oculten maliciosamente antecedentes negativos, serán pasibles de las sanciones establecidas en el Capítulo V de la presente Ley. La reincidencia dará lugar a su baja e inhabilitación permanente.

Artículo 26.- Las empresas de seguridad que tengan por objeto exclusivo la instalación o mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad así como el asesoramiento y planificación de actividades, podrán ser eximidas reglamentariamente de alguno de los requisitos, a excepción de los prescriptos en el Artículo 17.

Artículo 27.- Las empresas habilitadas no podrán utilizar nombres, uniformes, vehículos o material alguno que puedan inducir al usuario o a la población, a



*Legislatura de la Provincia  
de Río Negro*

identificarlas como servicio de instituciones oficiales, derivados o dependiente de ellas o que hagan presumir que cumplen tales funciones.

Artículo 28.- Salvo la función de protección de transporte de dinero, valores, bienes u objetos, el personal de seguridad ejercerá sus funciones exclusivamente en el interior de los edificios o de las propiedades de cuya vigilancia estuvieren encargados sin que tales funciones se puedan desarrollar en las vías o espacios públicos ni en aquellas que no teniendo tal condición, sean de uso común. Para la implantación de servicios especiales de vigilancia y protección, en el caso de parques industriales o urbanizaciones aisladas, deberá requerirse una autorización previa de la autoridad de aplicación.

Artículo 29.- Queda prohibido a las empresas de seguridad o vigilancia, a los servicios internos de vigilancia, y a los integrantes o personal de los mismos que se encuentren en cumplimiento de sus funciones, realizar tareas de:

- a) intercepción y/o captación del contenido de comunicaciones, sea postales, telefónicas, telegráficas, radiofónicas, por telex, facsimil, o cualquier otro medio de transmisión de cosas, voces, imágenes o datos a distancia.
- b) Adquisición de información a través de aparatos electrónicos, mecánicos o de cualquier otro tipo, excepción hecha de la realización de tareas de vigilancia por cuenta del propietario o legítimo tenedor del bien en el que se realiza la actividad.
- c) Obtención de cualquier información, registro, documento o cosa, para la cual fuera necesaria la entrada en domicilios privados o edificios públicos o la obligación del acceso a cosas, o bien la búsqueda, remoción, retorno o examen de cualquier tipo, salvo conformidad expresa y por escrito del titular del domicilio de que se trate o en su caso el propietario o legítimo tenedor de las cosas de que se trate.

CAPITULO III

DE LAS INSTALACIONES Y LOS MEDIOS MATERIALES Y TECNICOS

Artículo 30.- La autoridad de aplicación determinará las características que deberán reunir los medios materiales y técnicos que podrán utilizarse para el desarrollo de la actividad. Las características de dichos medios podrán ser modificadas cuando varíen las condiciones que determinaron su homologación.

En el caso del armamento solo podrá homologar



*Legislatura de la Provincia  
de Río Negro*

las armas y municiones de uso civil en estado original y autorizadas por la legislación vigente.

Las empresas no podrán afectar a sus actividades un número de armas que supere la cantidad de sus agentes, pudiéndose autorizar un excedente de hasta un diez por ciento (10%) en calidad de material de reserva. El parque de municiones almacenado debe estar relacionado con el armamento autorizado.

Artículo 31.- La autoridad de aplicación no homologará bajo ninguna circunstancia medios materiales o técnicos que atenten contra el honor, la intimidad personal y los demás derechos personalísimos. Tampoco homologará las que puedan producir daños, poner en peligro la seguridad ciudadana o causar molestias a terceros.

Artículo 32.- Sólo se autorizará el uso de armas cuando se trate de servicios de protección del almacenamiento, recuento, clasificación y transporte de dinero, valores y objetos valiosos; los de vigilancia y protección de fábricas, depósito o transporte de armas y explosivos; de industrias o establecimientos que se encuentren aislados y aquellos otros de análoga significación.

Artículo 33.- Las armas adecuadas para realizar los servicios de seguridad, previstos en el artículo anterior, solo se podrán portar estando de servicio.

Artículo 34.- Las empresas estarán obligadas a comunicar a la autoridad de aplicación, para su registración en el Banco de Datos, los vehículos y edificios afectados a las actividades reguladas por la presente Ley, sean de su propiedad o u otra forma de posesión y uso de acuerdo a la legislación vigente. Igual requisito deberán cumplir respecto de los equipos de comunicación que se afectarán al desarrollo de la actividad. Para el caso de utilización de equipos de radio deberán acompañar, junto a la notificación, la autorización previa de la Secretaría de Comunicaciones del Poder Ejecutivo Nacional en la que conste la frecuencia en que la empresa receptan las señales.

#### CAPITULO IV

##### DE LA CAPACITACION DEL PERSONAL

Artículo 35.- La formación, actualización y adiestramiento del personal que desempeñe las actividades reguladas por la presente, se llevarán a cabo con sujeción a las normas que determine la autoridad de aplicación. Deberá estar a cargo de profesores acreditados y en centros de formación que deberán reunir los requisitos de ubicación y acondicionamiento especialmente en cuanto se refiere a los espacios para el aprendizaje, práctica y perfeccionamiento en la utilización de armas de fuego y sistemas de seguridad.



*Legislatura de la Provincia  
de Río Negro*

Artículo 36.- Los centros de formación deberán llevar a cabo programas permanentes los que tendrán como principios fundamentales el respeto por los derechos humanos y la observación de las garantías consagradas por la Constitución Nacional y la Constitución Provincial.

Artículo 37.- El personal docente y la dirección de los centros de formación deberá reunir los requisitos exigidos por el artículo 17 de la presente, a excepción de los determinados en el inciso c).

CAPITULO V

REGIMEN SANCIONADOR

Sección I - Infracciones

Artículo 38.- Serán consideradas infracciones:

- a) La prestación de servicios de seguridad a terceros, careciendo de la habilitación necesaria.
- b) La omisión, ocultamiento o falseamiento de los requisitos prescriptos en los artículos 17 y 18.
- c) La realización de actividades prohibidas por los artículos 14 y 28.
- d) La instalación de medios materiales o técnicos no homologados.
- e) La negativa a facilitar, cuando proceda, la información contenida en los libros-registros complementarios.
- f) El incumplimiento de las previsiones normativas sobre adquisición, almacenamiento, custodia y uso de armas o la tenencia de éstas por el personal a su servicio.
- g) La realización de servicios de seguridad con armas no autorizadas y la utilización de aparatos de alarma u otros dispositivos de seguridad no homologados.
- h) la utilización de aparatos de alarma u otros dispositivos de seguridad no homologados.

Sección II - SANCIONES

Artículo 39.- De acuerdo con lo establecido y cuando corresponda, la autoridad de aplicación, mediante acto administrativo que determine la reglamentación de la presente, podrá imponer las siguientes sanciones:



*Legislatura de la Provincia  
de Río Negro*

- a) Multas, entre el cinco por ciento (5%) y hasta un veinte por ciento (20%) del giro mensual según lo que surja de las correspondientes declaraciones juradas y/o auditorías contables, en su caso.
- b) Suspensión de la inscripción por un lapso no inferior a los treinta (30) y no superior a los noventa (90) días.
- c) Cancelación de la inscripción.

Las multas previstas en el inciso a) podrán ser consideradas sanciones complementarias cuando correspondiere la aplicación de las previstas en los incisos b) y c).

Artículo 40.- El material no homologado utilizado en las actividades que regula la presente serán decomisados y se procederá a su destrucción si no fueran de lícito comercio. Si el material secuestrado lo fuere solo en razón de su utilización indebida por parte de los servicios privados de seguridad, sustanciado el proceso judicial pertinente, será entregado a la autoridad de aplicación para ser destinado al reequipamiento de las fuerzas de seguridad a su cargo y/o asociaciones civiles de tiro.

Artículo 41.- Contra las resoluciones que impongan sanciones, se podrán imponer los recursos previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos.

Artículo 42.- Para la graduación de las sanciones, cuando no estén señaladas individualizadamente en los reglamentos, las autoridades competentes tendrán en cuenta la gravedad y trascendencia del hecho, el posible perjuicio para el interés público, la situación de riesgo creada y mantenida, para personas o bienes, la reincidencia, en su caso, y la capacidad económica del infractor. Cuando la comisión de las infracciones hubieren generado beneficios para los autores de las mismas, las multas que la autoridad competente aplique podrán alcanzar el monto de hasta dos veces el de dicho beneficio más la que les correspondiere en aplicación de lo dispuesto en el artículo 38.

Artículo 43.- Los fondos recaudados en concepto de multa y aranceles, serán destinados al "Programa de Asistencia a la Víctima".

Sección III- PROCEDIMIENTO

Artículo 44.- Toda persona que tuviere conocimiento de irregularidades cometidas por empresas o personas de seguridad privada en el desarrollo de sus actividades, podrá denunciar aquellas ante la Defensoría del Pueblo a efectos de que éste organismo impulse la investigación de los hechos motivo de la misma, pudiendo en su caso, de acuerdo a la



*Legislatura de la Provincia  
de Río Negro*

magnitud del ilícito, proteger al denunciante mediante la reserva de su identidad.

Artículo 45.- Iniciado el expediente, el órgano que lo haya ordenado podrá solicitar ante la autoridad de aplicación la adopción de las medidas cautelares necesarias para la adecuada instrucción del procedimiento, así como para evitar la continuación de la infracción o asegurar el pago de la sanción, en el caso de que esta fuera pecuniaria, y el cumplimiento de la misma en los demás supuestos.

Dichas medidas deberán ser proporcionales a la naturaleza de la presunta infracción y podrán consistir en:

- a) La requisa o secuestro de vehículos, armas, material o equipamiento prohibido o no homologado, como así los instrumentos y los efectos de la infracción.
- b) El retiro preventivo de las habilitaciones o permisos.
- c) La suspensión administrativa de la habilitación del personal de seguridad privada o en su caso, de la tramitación necesaria para el otorgamiento de aquella mientras dure la instrucción de expedientes por infracciones graves o muy graves en materia de seguridad.

Artículo 46.- En caso de grave riesgo o peligro inminente para las personas o bienes, las medidas previstas en el inciso a) del artículo anterior, podrán ser adoptadas inmediatamente por los agentes de la seguridad pública de la provincia. Dichas medidas deberán de ser ratificadas en un plazo máximo de setenta y dos (72) horas.

Sección IV - EJECUCION

Artículo 47.- Las sanciones impuestas serán ejecutorias, desde que la resolución adquiera firmeza por vía administrativa. Cuando la sanción sea de naturaleza pecuniaria el plazo para satisfacerla no podrá ser inferior a quince (15) días ni superior a treinta (30) días hábiles administrativos, desde su notificación pudiendo acordarse el fraccionamiento del pago.

Artículo 48.- En caso de suspensión temporal, cancelación de inscripciones, retiro de documentación y clausura o cierre de establecimiento o empresas, la autoridad de aplicación señalará un plazo de ejecución de las medidas, el que no podrá ser inferior a los quince (15) días ni superior a los dos meses, oyendo al sancionado y a los terceros que pudieran resultar directamente afectados.

Artículo 49.- Para la ejecución forzosa de las sanciones se seguirá el procedimiento que determine la Ley de Procedimiento Administrativo.



*Legislatura de la Provincia  
de Río Negro*

Artículo 50.- Las resoluciones sancionadoras, recaídas en los expedientes sustanciados, por infracciones graves podrán ser hechas públicas por la autoridad de aplicación, en los términos que reglamentariamente se determinen.

Artículo 51.- Quedan derogadas todas las normas que se opongan a la presente.

Artículo 52.- De forma.



*Legislatura de la Provincia  
de Río Negro*

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: Las personas físicas o jurídicas habilitadas con anterioridad a la sanción de la presente ley deberán adaptarse a los requisitos y exigencias que la misma determina dentro de un plazo máximo seis (6) meses de la promulgación de la presente o su reglamentación, según correspondiere.

SEGUNDA: La autoridad de aplicación gestionará dentro de los treinta (30) días de promulgada la presente por ante los Registros Nacional y Provincial de Armas respectivamente y en el ámbito de sus competencias la remisión de la documentación que a continuación se detalla:

- a) Nómina de personas físicas y jurídicas, habilitadas para el ejercicio de las actividades reguladas por la presente, que desarrollen las mismas en forma exclusiva en jurisdicción de la provincia.
- b) Nómina de personas físicas y jurídicas habilitadas para el ejercicio de las actividades reguladas por la presente que desarrollen las mismas en forma habitual en jurisdicción de la provincia.
- c) Nómina de las personas con licencia vigente que desarrollen en forma exclusiva en jurisdicción de la provincia o que por naturaleza interjurisdiccional desarrollen las mismas en forma habitual en jurisdicción de la provincia.